

La consulta plantea si es posible la remisión a diversas unidades de la consultante de los listados de alumnos y personal con objeto de informar a éstos sobre asuntos de su competencia, y, por otra parte, si sería preciso la modificación de un fichero ya inscrito en la medida que el sistema de tratamiento de los datos comprende una base de datos centralizada y otras ubicadas en departamentos, y en la medida que el tratamiento no sólo sea automatizado sino también manual, en relación con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), y a su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

I

La primera de las cuestiones constituye una cesión de datos de carácter personal, definida en el artículo 3 i) de la LOPD como “toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado.”

La consulta no aclara la finalidad de dicha cesión, manejando una expresión genérica “para asuntos de su competencia”, que no posibilita un conocimiento de la finalidad de la cesión de datos solicitada por los diferentes departamentos o unidades de la Universidad consultante, por lo que se procede a dar una respuesta genérica.

La finalidad constituye un pilar esencial en la protección de datos de carácter personal, siendo así que el artículo 4 de la LOPD recoge el principio de calidad de datos, señalando: “1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.

2. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que hubieran sido recogidos.”

De modo que si la cesión es para una finalidad diferente de la que sirvió para fundamentar la recogida de los datos, será preciso recabar el consentimiento de los afectados previo e informado de los extremos contenidos en el artículo 5 de la LOPD.

Con carácter general puede señalarse que la cesión o comunicación de datos, considerada conforme al artículo 3 i) de la Ley citada como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado” se regula con carácter general en el artículo 11 LOPD, cuyo apartado primero establece que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”.

El apartado segundo de dicho artículo contempla una serie de supuestos en que las cesiones de datos no requieren el consentimiento de los interesados, entre los que se encuentra, en lo que ahora interesa, el recogido en el apartado segundo, esto es, que la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.

La cesión de datos entre Administraciones Públicas tiene sin embargo un régimen específico establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999.

Debe recordarse, al tratar de este artículo, que la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre ha declarado contrario a la Constitución y nula la previsión que contenía el apartado primero del mismo, según el cual la cesión entre Administraciones Públicas resultaba posible cuando la comunicación hubiere sido prevista por las Disposiciones de creación del fichero o por Disposición de superior rango que regule su uso, por cuanto viene a considerar que la reserva de Ley prevista con carácter general por la Ley Orgánica 15/1999 para la cesión de datos de carácter personal ha de considerarse igualmente predicable en los supuestos de cesión de datos entre Administraciones Públicas, siendo contraria a la Constitución la posibilidad de habilitar dicha cesión con base en una norma de rango reglamentario.

El artículo 21.1 de la LOPD señala: “Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones Públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.”

Fuera de estos supuestos, la cesión entre Administraciones Públicas siguiendo la Sentencia referida sólo podrá tener lugar cuando concurra una de las causas previstas con carácter general en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica.

De este modo, la citada Sentencia considera que, en caso de que una norma con rango de Ley no dé cobertura a una cesión entre Administraciones

Públicas, la misma sólo podrá tener lugar como consecuencia del ejercicio por cedente y cesionaria de unas mismas competencias.

Lo decisivo es la prohibición expresa de que los datos se comuniquen para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas a aquellas para las que fueron recabados.

Por ello, si la cesión que plantea la consulta entre diversos departamentos no fuera para el ejercicio de competencias sobre la misma materia, la cesión deberá cumplir lo previsto en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 que dispone que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”.

Esta limitación es de aplicación no sólo a la cesión que se pueda producir entre cualesquiera Administraciones públicas y organismos públicos dependientes de ellas, sino también a la que pueda darse entre los órganos administrativos de esas propias Administraciones; porque lo decisivo es la prohibición expresa de que los datos se comuniquen para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas a aquellas para las que fueron recogidos. Este requisito tiene su razón de ser en la órbita de una misma Administración.

## II

Respecto de la cuestión planteada de si los expedientes administrativos en soporte papel constituyen un fichero, basta atender a la definición de fichero que da el artículo 3 b) de la LOPD: “Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuera su forma o modalidad de creación, almacenamiento, organización o acceso.”

La directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre, define en el apartado c) de su artículo 2 el fichero como todo conjunto estructurado de datos personales, accesible con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica, poniendo el acento en dos características esenciales: la organización y estructura con la que los datos deben estar conservados y su accesibilidad con arreglo a criterios determinados.

Por consiguiente, si los expedientes referidos por la consultante consistieran en una pluralidad de datos sin ordenar o estructurar, no podría hablarse de fichero en sentido técnico. Si, por el contrario, estuvieran en un archivo estructurado con arreglo a un determinado criterio relativo a las personas que permita acceder a los datos fácilmente, estaríamos ante un fichero en soporte papel.

### III

La última cuestión planteada se refiere a los ficheros inscritos por la consultante en el Registro de Ficheros Públicos de esta Agencia, en concreto a si sería preciso notificar la inscripción de un nuevo fichero o modificar el inscrito para incorporar que en el sistema de tratamiento además de una base de datos centralizada hay otras ubicadas en Departamentos.

Si las bases de datos de los Departamentos constituyeren por sí mismas diferentes o nuevos conjuntos de datos organizados y estructurados respecto del fichero que ya tiene inscrito la consultante, sería preciso su inscripción previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la LOPD que señala que la creación o modificación de ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario oficial correspondiente, y el artículo 55 del Reglamento, Real Decreto 1720/2007 establece la obligación de notificación de ficheros.

Si lo que está señalando la consultante es que el fichero está descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica, no estaríamos ante un nuevo fichero o una modificación del mismo.

Conforme al artículo 5. 2 n) del Reglamento debe entenderse por “sistema de tratamiento” el modo en que se organiza o utiliza un sistema de información. Atendiendo al sistema de tratamiento, los sistemas de información podrán ser automatizados, no automatizados o parcialmente automatizados.

Si la modificación del fichero inscrito de la consultante afecta al sistema de tratamiento utilizado para organizar el mismo, estaríamos ante una modificación de la estructura del propio fichero que debe figurar entre los extremos de la disposición de creación o modificación de ficheros, conforme resulta del artículo 54.1 c) del Reglamento, y por consiguiente, conforme señala su número 2 sería preciso dictar la disposición de modificación indicando las modificaciones producidas en dicho extremo y su posterior inscripción en el Registro.

El contenido de dicha disposición es el reflejado en el apartado 2 del artículo 20 de la LOPD y el artículo 54.1 del Reglamento exige que la norma de creación del fichero incorpore “La estructura básica del fichero mediante la descripción detallada de los datos identificativos, y en su caso, de los datos especialmente protegidos, así como de las restantes categorías de datos de carácter personal incluidas en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización”.

Por lo tanto, si el sistema de tratamiento manual del fichero no consta en la disposición de creación del fichero, deberá dictarse la correspondiente disposición o acuerdo de modificación haciendo constar el mismo.